

La crisis siempre llama dos veces

MANUEL CASTELLS

LA VANGUARDIA, 8.05.10

Arde Grecia. Y sus llamas amenazan con propagarse mientras el areópago de políticos europeos firma cheques sin fondos (su deuda pública es más del 50% del PIB) y sermonea a los ciudadanos como si ellos fueran responsables del endeudamiento masivo en ese mundo de jauja crediticia que nos inventamos. La insolvencia de Grecia, suspendida temporal y artificialmente por una inyección de 110.000 millones de euros de sus socios europeos y el FMI, podría provocar una reacción en cadena semejante a la causada por la bancarrota de Lehman Brothers en el 2008. Pero esta vez no son instituciones financieras y empresas las que corren peligro, sino gobiernos y monedas. La crisis financiera del 2008 indujo una crisis económica en el 2009 que podría convertirse en crisis fiscal generalizada en el 2010. O, como se dice ahora, en crisis de activos soberanos, término paradójicamente aplicado a los títulos emitidos por gobiernos que hace tiempo perdieron su soberanía financiera en la globalización.

La diferencia es que los gobiernos acudieron en socorro de las empresas en quiebra, mientras que los mercados financieros contribuyen a agravar la crisis, retirando la confianza de los inversores a activos de países catalogados en la zona de riesgo. De ahí que la degradación de la calificación financiera de la economía española en su conjunto por parte de Standard & Poor's (¿quién los legitima a ellos o a Moody's?) haya tenido como consecuencia inmediata elevar en un 25% el costo del pago de la deuda española y dificultar la venta de los 5.000 millones en bonos del Tesoro emitidos por el Gobierno a pesar de su excelente rendimiento

a cinco años. Y es que ese plazo se percibe como una eternidad que presupone una solvencia futura de la que muchos dudan ahora. En principio, tal percepción no parece justificada. La deuda pública española (un 53% del PIB) es menor que la de la mayoría de los socios europeos, incluida Alemania, y está muy por debajo de la de Grecia (115%). Pero los ojeadores financieros miran otros dos datos. Uno: la proporción de activos en manos de inversores extranjeros (un 75% del PIB) es la segunda más alta, al nivel de Grecia. Una retirada de confianza del mercado de capitales tendría consecuencias mucho más graves que en Alemania, Francia o Italia, donde los inversores nacionales son los principales poseedores de títulos de deuda pública y por tanto interesados en mantener el valor del país. Aun así, para que los inversores extranjeros se arriesguen a perder parte de su inversión vendiendo títulos españoles tendrían que tener una razón poderosa: perder más aún si esperan. Y aquí interviene el segundo factor: la fragilidad de la estructura productiva española revelada por la mayor tasa de paro de la OCDE. El Gobierno tiene razón aduciendo la solidez del sistema financiero español (aunque eso depende de que se acelere la reestructuración de las cajas y se haga adecuadamente -aquí confío en Isidre Fainé-) y unas cuentas en orden supervisadas por un fiable Banco de España. Pero si se dilata el retorno al crecimiento con empleo, la solvencia del sector público se reducirá, a menos de que haya una subida importante de impuestos, junto con un recorte aún más drástico del gasto, con las consabidas consecuencias sociales y políticas. Así, seguimos pagando la quiebra básica, la del modelo de crecimiento basado en el ladrillo, la especulación inmobiliaria y el crédito fácil, con dependencia excesiva de un turismo de masas vulnerable a la crisis. Ahí está la diferencia con economías como la francesa o la estadounidense, que, tras lograr una cierta estabilidad financiera, han usado sus reservas

de productividad en la industria y los servicios, incrementando el ritmo de innovación, única vía de salida de la crisis a largo plazo. Si bien es cierto que la confianza en las instituciones financieras está siendo nuevamente dañada por el fraude imputado a Goldman Sachs y por la volatilidad de los mercados, en los que los duendes electrónicos siguen haciendo de las suyas porque hemos entregado los ahorros de nuestras vidas a modelos informáticos operados por mocosos recién graduados.

Las caídas de la bolsa en España, Europa y EE.UU., acentuadas por maniobras especulativas y pánicos psicológicos, indican la percepción de los mercados de que el salvamento de Grecia es un parche momentáneo que podría prefigurar una desconexión de Grecia con respecto al euro y, por tanto, reduciría la vigencia del euro a aquellas economías con niveles de productividad, competitividad y equilibrio fiscal relativamente comparables. Las consecuencias serían catastróficas, porque una venta masiva de deuda pública española no puede ser digerida por el eurosistema: somos demasiado grandes.

Hay algo más. La gravedad de las crisis no depende sólo de su naturaleza, sino de su gestión. Aquí la capacidad de liderazgo político y la solidez de las instituciones políticas son factores clave. Y ocurre que justo en este momento, por pura mala pata, la irresponsabilidad del Tribunal Constitucional está situando a España al borde de una crisis constitucional de la que desde Madrid no se percatan porque siguen sin entender la profundidad de la brecha que se está abriendo con Catalunya. Y resulta también que el Gobierno español lleva meses minimizando el carácter estructural de la crisis y anunciando que ya se acaba, día sí, día también, con la consiguiente pérdida de credibilidad. Por si faltaba algo, la oposición niega el pan y la sal al Gobierno con el único

objetivo de llegar al poder por la vía rápida y entonces ya lo arreglarán todo. Si queda algo. ¿Qué pasó con el espíritu de los pactos de la Moncloa, componente clave de la transición?

Con un país fragmentado y una clase política enzarzada en sus luchas intestinas, con un 20% de paro, retraimiento de la inversión y posible quiebra de la deuda pública, las crisis financiera, económica y fiscal podrían desembocar en una crisis aún más grave: la crisis social.